



Consejo de Seguridad

Distr. general
6 de diciembre de 2007
Español
Original: inglés

Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Timor-Leste, 24 a 30 de noviembre de 2007

I. Introducción

1. En su carta de fecha 31 de octubre de 2007 (S/2007/647), el Presidente del Consejo de Seguridad informó al Secretario General de que los miembros del Consejo habían decidido enviar una misión a Timor-Leste del 24 al 30 de noviembre de 2007. El principal objetivo de la misión, según lo establecido en su mandato, era reafirmar el compromiso del Consejo de Seguridad de ayudar al pueblo timorense a consolidar la paz, la gobernanza democrática y el estado de derecho en el período postelectoral en Timor-Leste; expresar el pleno apoyo del Consejo de Seguridad a la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) y evaluar los progresos realizados sobre el terreno con respecto al cumplimiento del mandato de la UNMIT. También se encargó a la misión que intercambiara opiniones con las autoridades timorenses y examinara con ellas medidas para ayudar al país a fomentar la capacidad necesaria para consolidar los logros alcanzados hasta el momento en materia de seguridad y democracia, así como en otras esferas. El mandato completo y la composición de la misión figuran en el anexo del presente informe.

2. La misión salió de Nueva York el 24 de noviembre y volvió el 1º de diciembre. Durante la visita, sus miembros se reunieron con el Presidente de Timor-Leste, Sr. José Ramos-Horta, el Primer Ministro Xanana Gusmão, el Presidente del Parlamento Nacional, el Presidente del Tribunal de Apelaciones, ministros del Gabinete, miembros del Parlamento, dirigentes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, el Comandante General electo de la Policía Nacional, el Comandante de las Fuerzas Armadas, la comunidad diplomática, la UNMIT y el Comandante interino de las fuerzas de seguridad internacionales. La misión se reunió por separado con los obispos de Dili y Baucau. Además, visitó el distrito occidental de Liquica y la segunda ciudad de Timor-Leste, Baucau, ubicada en la parte oriental del país, para reunirse con funcionarios locales, representantes de los partidos políticos y los comandantes de la policía de la UNMIT y de la Policía Nacional de cada distrito.



II. Principales cuestiones e inquietudes

Reconciliación nacional y democracia

3. La misión visitó Timor-Leste después de las primeras elecciones presidenciales desde la independencia, celebradas en abril, mayo y junio de 2007, en un momento en que el país intentaba recuperarse lentamente de la crisis de 2006. Esa crisis demostró que las diferencias entre los líderes políticos del país acentuaban las divisiones en todos los niveles de la sociedad timorense y puso así de relieve la necesidad de intensificar los esfuerzos en pro de la reconciliación y el diálogo nacionales. Aunque las elecciones de 2007 se celebraron en forma pacífica y el pueblo timorense y la comunidad internacional consideraron que habían sido libres y limpias, la violencia que siguió al anuncio de la formación del nuevo Gobierno en agosto de 2007 (en el que se invitó a la Alianza para una Mayoría Parlamentaria, con 37 escaños en el Parlamento, a formar el Gobierno y no al anterior partido de gobierno, Fretilin, que obtuvo 21 escaños) puso en evidencia la fragilidad de la situación política y la necesidad de realizar nuevos esfuerzos sostenidos para establecer una sociedad verdaderamente democrática.

4. El Presidente Ramos-Horta y el Primer Ministro Gusmão destacaron ante la misión que el Estado y el Gobierno estaban decididos a restaurar la estabilidad y la normalidad, y reafirmaron su compromiso con la democracia y el estado de derecho. El nuevo Gobierno sólo había asumido sus funciones en agosto de 2007, y el Primer Ministro consideraba que, si bien el país enfrentaba muchos problemas, el Gobierno podría ocuparse de ellos en el plazo de uno o dos años. Asignó particular importancia a la institucionalización de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la instauración de los valores democráticos. Las elecciones constituían un claro avance de Timor-Leste en la consolidación de la democracia. Desde que había empezado su labor el nuevo Parlamento, los debates sobre el programa y el presupuesto de transición del Gobierno habían sido un ejemplo alentador de un debate democrático constructivo. El Gobierno había demostrado el debido respeto al Parlamento como órgano independiente soberano y los debates parlamentario habrían sido, en general, constructivos.

5. En una reunión con la misión, el Secretario General del Fretilin y ex Primer Ministro, el Sr. Mari Alkatiri, señaló que las elecciones habían generado nuevos problemas. Calificó de “inconstitucional” e “ilegal” al nuevo Gobierno y dijo que éste “no tenía legitimidad” ya que el partido liderado por el Sr. Xanana Gusmão sólo había obtenido el 24% de los votos, mientras que el Fretilin había alcanzado el 29%, y la coalición dirigida por el Sr. Gusmão, integrada por cuatro partidos que habían recibido un total combinado de más del 51% de los votos, no se había formado sino después de las elecciones, a fin de obtener la mayoría de los escaños en el Parlamento. El Sr. Alkatiri dijo que si la coalición hubiera existido antes de las elecciones y hubiera participado en ellas como un bloque y ganado, el Fretilin habría aceptado los resultados. Declaró que habría que celebrar elecciones nuevamente a más tardar en 2009, quizás a mediados de ese año. Sin embargo, afirmó que el Fretilin estaba decidido a no recurrir a la violencia para resolver diferencias e hizo hincapié en que utilizaría “medios políticos” para convencer al Presidente de que había que celebrar otras elecciones. A pesar de las inquietudes del Fretilin, todos los interlocutores, incluidos el Presidente Ramos-Horta, el Sr. Alkatiri y los representantes de la UNMIT, informaron a la misión de que el

partido asistía a las sesiones del Parlamento y participaba activamente en ellas, incluso en los debates de las comisiones y el plenario.

6. Aunque se lograron avances considerables en cuanto a la democratización, la misión observó que aún no se habían resuelto plenamente las causas básicas de la crisis de 2006 y sus consecuencias. A raíz de la crisis y de las elecciones celebradas recientemente, sigue habiendo tensiones políticas subyacentes en diversos sectores de la sociedad a nivel nacional y en los distritos, debidas a las diferencias entre quienes apoyan y quienes repudian al Fretilin, la dinámica entre las regiones oriental y occidental y las divisiones entre los militares y la policía. Varias organizaciones no gubernamentales locales enviaron una declaración a la misión en la que señalaron que Timor Oriental enfrentaba una crisis de identidad, que esa situación había surgido a causa de la historia dividida y compleja de las tres últimas generaciones del pueblo timorense, y que presentaba enormes desafíos para el proceso de consolidación nacional y el desarrollo del país en general. Instaron a la misión a ayudar al Gobierno a crear mecanismos para lograr la participación de los miembros de la sociedad civil a fin de formular y aplicar una estrategia común para construir la unidad nacional.

Situación general de la seguridad y reforma del sector

7. Tras los violentos hechos registrados en los distritos orientales después de la ceremonia inaugural del nuevo Gobierno el 8 de agosto, la situación general de seguridad en todo el país ha mejorado. Sigue habiendo disturbios esporádicos de poca importancia en algunas partes de Dili y la situación sigue siendo frágil e inestable. Hay inquietud por la posibilidad de que algunos problemas surgidos a partir de la crisis y aún no resueltos (como los relacionados con el Comandante Reinado, que está prófugo, los “demandantes” (véase *infra*) y los desplazados internos) afecten negativamente la situación de seguridad. Todos los interlocutores timorenses reconocieron que la policía de la UNMIT había contribuido a mejorar la situación de seguridad, y pidieron que ésta siguiera presente y continuara ayudando al Gobierno a mantener la seguridad. Los partidos de la oposición representados en el Parlamento opinaron que, debido a las divisiones entre los dirigentes políticos y la falta de confianza en las instituciones de seguridad timorenses, la gente seguía considerando inciertas las perspectivas de seguridad y estabilidad a más largo plazo. Todas las partes pidieron que las Naciones Unidas y las fuerzas internacionales de seguridad permanecieran en el país mientras se establecían estructuras democráticas.

8. En general, se dijo a la misión que la cooperación entre la policía de la UNMIT, que tenía el mandato de hacer cumplir la ley provisionalmente, y la policía nacional, con la que compartía locales, había sido satisfactoria, aunque podía mejorar. Algunos representantes de la sociedad civil timorense en los distritos transmitieron a la misión sus quejas sobre la prepotencia de algunos agentes de policía de la UNMIT, entre otras cosas al ocuparse de incidentes en los campamentos de desplazados internos, en algunos de los cuales las mujeres y los niños son víctimas de actos de violencia. En cuanto al fortalecimiento institucional de la policía nacional, el programa de registro y certificación avanza conforme a lo previsto en el Acuerdo complementario sobre las funciones de policía. Hasta ahora, 3.110 oficiales (el 97% del total de efectivos) se han registrado y sometido a la investigación de antecedentes. De ellos, 1.274 recibieron una certificación provisional y 186, una certificación definitiva. Sin embargo, varios comandantes de la policía nacional expresaron resentimiento por el hecho de que, como el proceso

de investigación de antecedentes y orientación estaba llevando mucho tiempo, los agentes no pudieran cumplir funciones operacionales y tuvieran que cederlas a la policía de la UNMIT. A su juicio, los timorenses debían participar cuanto antes en las operaciones de la policía, especialmente en Dili, y les preocupaba verse marginados ante su propio pueblo. A pesar de esas inquietudes, los timorenses claramente deseaban que la policía internacional transmitiera sus aptitudes y conocimientos especializados e impartiera más capacitación, y se sugirió que se enviara a la Misión más efectivos de policía de las Naciones Unidas preparados para ello.

9. Los desafíos más importantes en el sector de la seguridad, que comprenden la necesidad de mejorar la interacción entre las instituciones de seguridad, reforzar el marco jurídico, ampliar la capacidad operacional y mejorar la supervisión civil, se resolverán en el contexto del proceso de reforma del sector. En diciembre de 2006 se dieron los primeros pasos, con la creación del Grupo de Trabajo conjunto encargado del examen del sector de la seguridad, presidido conjuntamente por representantes superiores de los ministerios pertinentes y la UNMIT. El Presidente ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de examen del sector, para el cual estableció un mecanismo en tres niveles. El Presidente dijo a la Misión que, durante el mandato del Ministro anterior, la fuerza de policía había estado dividida en facciones, y que los timorenses debían aprender de los errores del pasado. Llevaría tiempo desarrollar una fuerza de policía profesional y se necesitaría la asistencia de las Naciones Unidas. También subrayó que, hasta tanto se resolvieran los problemas de las dos instituciones encargadas de la seguridad, seguiría habiendo graves problemas y reconoció que había intentado fomentar mejores relaciones entre las instituciones, cosa que efectivamente había ocurrido. Tanto el Secretario de Estado para la Seguridad como el Comandante de las Fuerzas Armadas señalaron que aún no se había formulado una política nacional de seguridad y este último indicó que era necesario aclarar la función de las fuerzas armadas en el país. Es alentador observar que se ha empezado a trabajar recientemente en la preparación de una política nacional de seguridad con la asistencia de la UNMIT, en el marco de los preparativos para el examen amplio del sector de la seguridad, en el que la Misión tiene el mandato de ayudar al Gobierno.

10. Las fuerzas armadas, cuyo desarrollo depende principalmente de los donantes bilaterales, están integradas por unos 700 hombres y mujeres, después de que 594 soldados fueran dados de baja en marzo de 2006, tras haber protestado por la supuesta discriminación en las Fuerzas. La forma en que se manejó la cuestión de esos “demandantes” fue un factor que contribuyó directamente a desencadenar la crisis de 2006. El Presidente y el Gobierno sostienen que la cuestión de los demandantes puede resolverse mediante una combinación de compensación financiera y, para algunos, la oportunidad de volver a ingresar a las fuerzas armadas, posibilidad que se evaluaría caso por caso. Esto debe compensarse con incentivos para la fuerza. El Presidente informó a la Misión de que esa propuesta había sido aceptada por el Comandante de las fuerzas armadas, que antes se oponía a la reincorporación de los demandantes.

Creación de capacidad

11. El Primer Ministro señaló la creación de capacidad como una de las principales necesidades del Gobierno y dijo que había pedido a los vecinos de Timor-Leste que ayudaran al Gobierno a reforzar la capacidad en diversos ámbitos. Desde 2002 se ha avanzado mucho en la formación de los funcionarios de la

administración pública, pero aún queda mucho por hacer. Durante la crisis de 1999, no menos de 8.000 funcionarios públicos, la mayoría de ellos indonesios, abandonaron el país. Se necesitarán varios años para alcanzar de nuevo el número de funcionarios conveniente y el nivel adecuado de competencia y experiencia. No sólo es muy escaso el personal disponible con competencias y conocimientos técnicos básicos; la administración pública de Timor-Leste adolece todavía de una falta profunda de claridad en cuanto a su estructura orgánica y sus sistemas y métodos de trabajo. Sigue siendo un desafío establecer una administración pública no politizada, con sistemas y procesos basados en el mérito, la competencia y el profesionalismo.

12. Al igual que los otros cuatro órganos soberanos (la Presidencia, el Parlamento, el Tribunal y el Ejecutivo), el sector judicial sigue necesitando asistencia internacional. El Presidente del Tribunal de Apelaciones (el principal tribunal del país), que es un magistrado internacional nacido en Timor-Leste y de etnia local, agradeció a la misión por los jueces, fiscales y personal judicial de otro tipo expatriados facilitados por las Naciones Unidas y la comunidad internacional, que, según dijo, habían permitido que el sistema funcionara y que se formaran recursos humanos nacionales para el sector. A su juicio, faltarían muchos años para que el país pudiera crear los recursos nacionales necesarios. Consideraba además que la escasez de recursos humanos se había agudizado por la crisis de 2006, que había incrementado el número de casos, varios de los cuales, de carácter delicado, se habían investigado y estaban en juicio. Dijo que la frágil estructura institucional era el principal problema que enfrentaba Timor-Leste, y que esto, unido a la limitada capacidad y la falta de aptitudes y capacitación, hacía más difícil establecer una cultura de solución pacífica de los conflictos. Pidió por tanto que aumentara la asistencia de las Naciones Unidas para mejorar el sector judicial. Asimismo, el Fiscal General Adjunto de Timor-Leste señaló que, como había sólo ocho fiscales nacionales y cuatro internacionales, la Fiscalía no contaba con el personal suficiente para cumplir su mandato. Por ejemplo, mencionó que el Gobierno y la UNMIT habían hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcionara personal especializado al sistema jurídico de Timor-Leste para investigar los casos señalados por la Comisión Especial Independiente de Investigación de las Naciones Unidas y enjuiciar a los responsables. Es alentador observar que el nuevo Gobierno ha manifestado su intención de incrementar las consignaciones presupuestarias destinadas al sector judicial, para garantizar que pueda desempeñar sus funciones.

La justicia y el estado de derecho

13. La Comisión Especial Independiente de Investigación para Timor-Leste recomendó en su informe de octubre de 2006 el enjuiciamiento de más de 60 personas presuntamente involucradas en actos criminales durante la crisis de 2006. Como resultado del informe, el Fiscal General ha abierto investigaciones de 16 casos relativos a la comisión de delitos penales. Se han tramitado los juicios de tres causas y están pendientes los de otras tres. Teniendo en cuenta las graves limitaciones de recursos del sector judicial mencionadas en el párrafo 12 *supra*, así como la delicada situación política, se han logrado progresos notables en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Especial. Todos los interlocutores timorenses que se reunieron con la misión subrayaron la importancia de que se hiciera justicia y se asignaran responsabilidades por los hechos de 2006, e insistieron en la importancia de investigar y enjuiciar a los responsables de todas las partes en ese conflicto.

En este contexto, algunos partidos políticos de oposición pidieron a las Naciones Unidas que agilizaran la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Especial, en particular el nombramiento de un Fiscal General Adjunto internacional, para asegurar que los enjuiciamientos se llevaran a cabo sin injerencias políticas.

14. El hecho de que el comandante de la policía militar Alfredo Reinado, que desertó, haya evadido a la justicia, y siga en libertad tras haberse fugado de la prisión en agosto de 2006, es invocado por el partido Fretilin contra el Gobierno actual como indicación de la falta de imparcialidad del Gobierno, ya que el anterior Ministro del Interior (y ex Vicepresidente del Fretilin) ha sido juzgado y condenado por su intervención en la crisis de 2006. El Presidente Ramos-Horta informó a la misión de que en febrero, el Gobierno había intentado apresar por la fuerza al Sr. Reinado pero éste había escapado y la operación había dejado un saldo de cinco personas muertas. Dio a entender que el Gobierno no tenía ninguna intención de recurrir a la fuerza para capturarlo ya que consideraba que ello sería “irresponsable”, y manifestó también su determinación de que el Sr. Reinado fuera sometido a la justicia, aunque tardara 10 años en conseguirlo. Si bien la estrategia del Gobierno consiste en negociar con el Sr. Reinado su sometimiento a la justicia, éste, a su vez, intenta vincular más estrechamente su propia situación a la cuestión de los demandantes. En particular, los miembros del Parlamento que pertenecen al Fretilin y varios representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil han expresado reiteradamente a la misión su inquietud por que no se haya resuelto el caso Reinado, ya que ello alimenta el temor de que la situación de seguridad siga siendo frágil y de que puedan producirse nuevos actos de violencia en el futuro.

Situación de los desplazados internos

15. Se estima que en el país hay todavía unos 100.000 desplazados internos (30.000 en Dili y 70.000 en los distritos), principalmente timorenses que abandonaron sus hogares a raíz de la crisis de 2006, ya fuera porque sus viviendas habían sido incendiadas o porque temían por su propia seguridad y la de sus familias. Miembros del Parlamento y representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil expresaron a la misión su inquietud por que la situación de los desplazados internos, una de las consecuencias de la crisis de 2006, no se hubiera resuelto todavía, pues consideraban que ello planteaba una amenaza a la estabilidad política y social y representaba un grave problema humanitario. La misión visitó uno de los cuatro principales campamentos de desplazados internos en Dili, situados en las cercanías del hospital nacional, y dialogó con los desplazados. La principal inquietud de éstos se debía a que habían percibido claramente que, pese a la presencia de la policía de la UNMIT y de las fuerzas de seguridad internacionales en Dili, la situación de seguridad no era propicia para que pudieran abandonar el campamento y regresar a sus hogares. Los desplazados expresaron también la opinión de que no se había logrado ningún progreso en cuanto al proceso judicial en el país.

16. La misión tuvo la clara impresión de que los principales motivos que impedían que los desplazados internos dejaran los campamentos y regresaran a sus hogares eran la inseguridad y la falta de vivienda. Muchos de los interlocutores timorenses de la misión consideraban que hasta tanto no se resolvieran los casos del Comandante Reinado y de los demandantes, los desplazados internos permanecerían en sus campamentos. Si bien un entorno político y de seguridad propicio alentaría a los desplazados a regresar a sus comunidades, también era claro que el Gobierno

tendría que adoptar medidas a más largo plazo para reconstruir las viviendas de los desplazados o construir nuevas viviendas destinadas a ellos.

Derechos humanos

17. Aunque la situación de los desplazados internos plantea un desafío importante para el Gobierno, la población de Timor-Leste en general disfruta de múltiples derechos humanos, incluidas la libertad de expresión, y de criticar al Gobierno, y la libertad de reunión y de culto. Reforzar el sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia debería ser una tarea prioritaria para despertar en la población una mayor confianza en cuanto a la capacidad del Estado de salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos. En lo que respecta a los mecanismos nacionales de derechos humanos, fue grato observar que la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia, que tiene el mandato de proteger los derechos humanos, reforzar la integridad, promover una adecuada gestión pública y luchar contra la corrupción, ha ampliado sus actividades, después de haber sufrido reveses en el ámbito de los derechos humanos y la gobernanza durante la crisis de 2006. En una reunión con la misión, el Defensor, Sr. Sebastião Dias Ximenes, explicó que su oficina había intervenido en la crisis humanitaria y de seguridad, principalmente mediante la vigilancia de los desplazados internos y el enlace con el Gobierno y otros organismos, para tratar de proteger sus derechos. Señaló, no obstante, que su oficina tendría que hacer mucho más para tratar de explicar su función a la población, de modo que ésta la percibiera como un mecanismo al que podían recurrir aquéllos los que la necesitaran.

18. El Defensor comunicó a la misión que desde marzo de 2006 había recibido 370 quejas de la población, la mayoría de las cuales eran acusaciones de mala administración, y muchas otras acusaciones de violaciones de los derechos humanos. La gran mayoría de las quejas, tanto las relativas a los derechos humanos como a la mala administración, estaban dirigidas contra la policía nacional, y el Defensor expresó la esperanza de que el Gobierno invirtiera una mayor cantidad de recursos en la capacitación y el adelanto profesional de la policía y la creación de mecanismos de rendición de cuentas. Es alentador observar que, según informó el Defensor a la misión, en el presupuesto correspondiente a 2008 se han incluido recursos para ampliar las actividades de la oficina, mediante la creación de cuatro oficinas regionales. Sin embargo, el Defensor enfrenta limitaciones en cuanto a la disponibilidad de personal capacitado, como sucede con otras instituciones del Estado, y seguirá necesitando asistencia de la comunidad internacional a ese respecto.

Desarrollo socioeconómico

19. La misión observó que el desempleo es muy alto, en particular entre los jóvenes (40%, en promedio) y ésta ha pasado a ser una causa importante de la violencia y el descontento. En una declaración entregada a la misión por las organizaciones no gubernamentales, éstas señalaron que muchos niños y jóvenes se habían visto envueltos en el conflicto étnico entre “este y oeste” y en grupos de artes marciales que habían estado combatiendo entre sí, lo que contribuía al malestar civil y podía ocasionar el desmoronamiento de la estructura social, especialmente en Dili. La pobreza sigue siendo una fuente principal de inestabilidad en Timor-Leste; aproximadamente el 40% de la población sigue viviendo por debajo de la línea nacional de pobreza y se necesitará una tasa de crecimiento económico anual del

7% para reducir la pobreza de manera significativa. La misión observó con agrado que en el “pacto” internacional para Timor-Leste, el Gobierno había señalado como cuestión prioritaria el empleo de los jóvenes. (El “pacto” es un marco de coordinación de los recursos que tiene por fin facilitar una cooperación más estrecha entre los sectores interesados nacionales e internacionales, en torno a seis áreas estratégicas prioritarias).

20. La misión observó también que Timor-Leste dispone para su desarrollo de los fondos financieros derivados de sus recursos de petróleo y gas. Se estima que la producción de petróleo y gas en el mar de Timor habrá producido 1.900 millones de dólares a fines de 2007. Los ingresos por este concepto se depositan en el Fondo Petrolero establecido en 2005, que, según se prevé, aumentará de manera constante a mediano plazo. Las proyecciones actuales indican que el valor total del Fondo ascenderá a 2.900 millones de dólares en 2008 y 5.600 millones de dólares en 2011. Sin embargo, las ONG observaron en su declaración a la misión que los altos ingresos derivados del sector petrolero hasta ahora no han repercutido en la vida de la población. Aunque se ha elogiado al Gobierno por la eficaz gestión del Fondo, habrá que establecer un equilibrio entre la administración prudente de los recursos del Fondo para las generaciones futuras y su utilización para mejorar la situación socioeconómica actual de la población de Timor-Leste, sobre todo de los jóvenes.

III. Observaciones

21. El Gobierno de Timor-Leste y la población timorense dieron una calurosa bienvenida a la misión, y su visita al país fue considerada mayoritariamente como una reafirmación del apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional a Timor-Leste y de su voluntad de seguir prestando asistencia al país. Todos los interlocutores timorenses con los que se reunió la misión expresaron su gratitud a las Naciones Unidas por su apoyo a Timor-Leste y elogiaron la labor de la UNMIT. Los dirigentes timorenses y los miembros del Gobierno en particular, expresaron su plena satisfacción con la cooperación recibida de la UNMIT. En vista de los enormes desafíos que enfrenta el país, todos los interesados timorenses manifestaron también su ferviente deseo de que las Naciones Unidas permanecieran en el país a más largo plazo.

22. Habiéndose reunido con los dirigentes timorenses, los parlamentarios, los representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, la iglesia, la comunidad diplomática y con altos funcionarios de la UNMIT, la misión considera que muchas de las causas de la crisis de 2006 aún no se han resuelto. Entre los motivos fundamentales de la crisis cabe señalar las cuestiones relativas a la gobernanza, la separación de poderes y la creación de instituciones duraderas. La crisis se produjo debido a divisiones entre los dirigentes, la debilidad de las instituciones, especialmente de las fuerzas de seguridad, y las deficientes estructuras de gobierno. Tampoco se han resuelto todavía algunas de las consecuencias de la crisis, como las cuestiones relativas al caso Reinado, los demandantes y los desplazados internos. Restablecer la confianza de la población en las instituciones estatales y la situación de seguridad, conseguir la reintegración de los desplazados internos y resolver las diferencias inevitables por la tenencia de tierras y bienes son todas tareas concretas que la nación deberá emprender en 2007 y en los años siguientes.

23. La preocupación primordial de la misión es que, pese a haberse celebrado con éxito las elecciones presidenciales y parlamentarias, sigue habiendo divergencias entre los dirigentes políticos. Esto tiene repercusiones para la unidad nacional y la estabilidad política, en momentos en que se requiere un consenso nacional para resolver los graves problemas con que se enfrenta el país, como la cuestión de los desplazados internos, la reforma del sector de la seguridad, el desarrollo económico, la restauración de la estabilidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mejoramiento de la gestión pública y el respeto del estado de derecho. La misión insta a los dirigentes políticos de Timor-Leste a que trabajen de consuno para resolver estos problemas de manera coordinada, en interés del país. Es evidente que sigue siendo necesario mantener un diálogo constante y adoptar medidas para resolver los conflictos en los planos nacional y comunitario, a fin de fomentar un mayor consenso político y atenuar las tensiones existentes. La misión alienta a la UNMIT a que continúe ejerciendo sus buenos oficios para agilizar las gestiones en pro de la reconciliación nacional. Considera que el proceso de reconciliación debería llevarse a cabo sin perjuicio de la necesidad de hacer justicia y de asignar responsabilidades por los actos delictivos; del derecho de los funcionarios elegidos de gobernar en consonancia con la Constitución y las leyes y con el programa de gobierno aprobado por el Parlamento Nacional; y del derecho de la oposición de cuestionar las políticas del Gobierno, exclusivamente por medios pacíficos y no violentos.

24. A la misión le resulta evidente que, si no se resuelven las diferencias entre los dirigentes timorenses, la incertidumbre política continuará y con ella la perspectiva de una reanudación de la violencia política y el derramamiento de sangre. El principal motivo de ansiedad de la población timorense es la precaria situación de seguridad y si mejoran las condiciones en ese ámbito ello contribuirá en gran medida al regreso y la reintegración de los desplazados internos. A este respecto es igualmente importante que los dirigentes resuelvan rápidamente no sólo las cuestiones relativas al caso Reinado y los demandantes, sino también otros asuntos señalados por la Comisión Especial Independiente de Investigación, en particular los que se refieren a la justicia y a la responsabilidad por los delitos cometidos durante la crisis de 2006. La solución de esas cuestiones y la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Especial Independiente también demostrarían a las claras que se ha hecho justicia, reafirmarían la primacía del estado de derecho en el país y servirían para contrarrestar la impresión de impunidad. También es necesario que se haga justicia para respaldar las gestiones en curso dirigidas a fomentar el diálogo y la reconciliación nacional.

25. En vista de la falta de confianza de la población timorense en sus instituciones de seguridad, especialmente en la policía, desde la crisis de 2006, la presencia constante de la policía de las Naciones Unidas se considera fundamental para mantener el orden público y para capacitar a la fuerza de policía y promover su desarrollo institucional. Sin embargo, la misión observó que pese a la cooperación generalmente satisfactoria que existe entre la policía de la UNMIT y la policía nacional, hay tensiones subyacentes en la relación entre ellas. Hay, al parecer, cierto resentimiento de parte de la policía nacional por el hecho de que la policía de la UNMIT cumpla funciones operacionales, en tanto que la policía nacional se encuentra en una posición subordinada y no puede asumir esas responsabilidades, mientras sus agentes se ven sometidos a la aprobación de la policía de la UNMIT, que también les sirve de mentora, de conformidad con el Acuerdo complementario

sobre las funciones de policía suscrito por la UNMIT y el Gobierno. La misión apoya decididamente la sugerencia del Representante Especial del Secretario General en Timor-Leste de que el Secretario General despliegue una misión de expertos lo antes posible para examinar la relación de trabajo, las funciones y las obligaciones de la policía de la UNMIT y su relación con las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior, conforme se estipula en el Acuerdo complementario.

26. A juicio de la misión, Timor-Leste continuará necesitando la asistencia de las Naciones Unidas en diversos aspectos en el futuro previsible. El año próximo será decisivo para que el nuevo Gobierno, que sólo asumió sus funciones en agosto de 2007, se consolide y ejecute sus programas prioritarios dirigidos a mejorar la seguridad y las condiciones de vida de la población, para lo cual necesitará el apoyo de sus asociados multilaterales y bilaterales a fin de alcanzar sus objetivos. La misión espera que el Gobierno considere la posibilidad de hacer inversiones en infraestructura, como caminos, medios de transporte, obras públicas, telecomunicaciones y energía, con lo cual no solamente creará fuentes de empleo para los jóvenes timorenses, sino también estimulará la inversión extranjera y el turismo, para el cual el país tiene un amplio potencial, siempre que se construyan las instalaciones necesarias. El clima para las inversiones y los negocios y la reintegración de los desplazados internos mejorará si el Gobierno acaba de establecer la infraestructura jurídica relativa a la tenencia de la tierra para conceder plenos derechos de propiedad. El Gobierno tal vez desee también considerar la posibilidad de aprovechar la riqueza derivada de sus recursos naturales de petróleo y gas para el desarrollo económico y social sostenible.

27. El mandato de la UNMIT, que termina el 26 de febrero de 2008, según lo decidió el Consejo de Seguridad en su resolución 1945 (2007), debería prorrogarse, ya que la misión puede cumplir una función importante para ayudar al pueblo timorense y a sus dirigentes a asumir los grandes desafíos que se plantean a este joven país. Si bien hay una enorme reserva de buena voluntad internacional hacia Timor-Leste, la misión espera que la asistencia internacional y de las Naciones Unidas se considere un estímulo para reforzar las instituciones democráticas, el estado de derecho y la autonomía de Timor-Leste, a fin de reducir su dependencia de la asistencia internacional. La misión expresó la opinión de que, si bien las Naciones Unidas pueden prestar asistencia, no están en condiciones de resolver los problemas políticos, sociales y económicos fundamentales del país. El futuro de Timor-Leste reposa en manos de sus dirigentes y de su población y ellos deben hacerse cargo de su propio desarrollo y demostrar la voluntad política de ayudarse a sí mismos. La misión pide al Secretario General que, durante el período de prórroga del mandato presente informes sobre el progreso alcanzado en las diversas esferas prioritarias, a fin de que el Consejo de Seguridad pueda determinar la magnitud del apoyo que deberán prestar las Naciones Unidas en el futuro.

Anexo

Mandato y composición de la misión

El mandato de la misión era el siguiente:

1. Reafirmar el compromiso del Consejo de Seguridad de preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de Timor-Leste y de promover la estabilidad a largo plazo en el país.

2. Encomiar al pueblo de Timor-Leste por la celebración exitosa de las elecciones y sus esfuerzos por consolidar la paz y la democracia en el país.

3. Alentar al Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos y el pueblo de Timor-Leste a que sigan colaborando, participando en el diálogo político y consolidando la paz, la democracia, el estado de derecho, la reforma del sector de la seguridad, el desarrollo social y económico sostenible y la reconciliación nacional en el país.

4. Reafirmar el compromiso del Consejo de Seguridad de ayudar al pueblo timorense a consolidar la paz, la gobernanza democrática y el estado de derecho en el período postelectoral en Timor-Leste, apoyar y alentar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas, la justicia y el cumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas en ese sentido, y subrayar que el mandato de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), establecido en la resolución 1745 (2007) del Consejo de Seguridad, constituye una importante contribución de las Naciones Unidas a dichos esfuerzos.

5. Expresar el pleno apoyo del Consejo de Seguridad a la UNMIT y a la presencia de las Naciones Unidas en Timor-Leste, y evaluar los progresos realizados sobre el terreno con respecto al cumplimiento del mandato de la UNMIT.

6. Intercambiar opiniones con las autoridades timorenses y examinar con ellas medidas para ayudar al país a fomentar la capacidad necesaria para consolidar los logros alcanzados hasta ahora en materia de seguridad y democracia, así como en otras esferas.

7. Destacar el compromiso a largo plazo de la comunidad internacional en favor de la estabilización y el desarrollo de Timor-Leste, así como la necesidad de que los asociados bilaterales e internacionales presten un apoyo constante a los esfuerzos de Timor-Leste por lograr la autosuficiencia.

La misión estuvo integrada por los siguientes miembros:

Embajador Dumisani Kumalo (Sudáfrica, Jefe de la misión)

Embajador Liu Zhenmin (China)

Sr. Muhammad Anshor (Indonesia)

Sra. Diana Eloeva (Federación de Rusia)

Embajador Peter Burian (Eslovaquia)

Embajadora Jackie Wolcott (Estados Unidos de América)